

El Tribunal Constitucional protege los Derechos Fundamentales de todos, también de los maltratadores

SABELA OUBIÑA Y MARIÁngeles CATALINA Profesoras de Derecho Procesal

Los hechos y la decisión del Tribunal Constitucional

Hace poco menos de un mes las portadas de la mayoría de periódicos nacionales se hacían eco del siguiente titular “El Tribunal Constitucional ampara a un maltratador”. Esta noticia ha generado muchos comentarios sorprendentes, como por ejemplo los de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a mujeres: “El Alto Tribunal, sorprendentemente, entiende que, también en los casos de violencia doméstica, la prisión provisional “sigue siendo de naturaleza excepcional” y sólo se justifica si “existen indicios reales” de que la mujer corre riesgos. Se trata éste de un tema delicado, de una gran sensibilidad social, y que no resulta indiferente como ha quedado reflejado con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La STC 62/2005, Sala 2ª, de 14 de marzo, otorga el amparo solicitado por el recurrente al haberse vulnerado respectivamente sus derechos fundamentales a la libertad personal (art.17.1 CE) y a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). El presente artículo comenta esta sentencia, una de las más polémicas del alto Tribunal en materia de amparo en los últimos tiempos. Dicha sentencia expone sucintamente la corrección y cautela con la que los Juzgados y Tribunales han de pronunciarse a la hora de decretar la medida cautelar más gravosa que existe en nuestro ordenamiento jurídico -la prisión provisional-. No se puede desconocer que junto a los derechos de las víctimas, los maltratadores -o presuntos maltratadores- también son titulares de una serie de derechos que, primero el legislador y luego los jueces y tribunales ordinarios, deben respetar.

Del resumen de hechos que relata la resolución podríamos reconstruir el siguiente relato fáctico: En el curso de unas diligencias previas incoadas a través de una denuncia por violencia en el ámbito familiar y amenazas, el Juzgado de Instrucción nº 2 de El Prat de Llobregat acordó contra el recurrente de amparo una orden de alejamiento de su ex mujer, su hijo y su suegra. Apenas cuatro meses después, el mismo Juzgado dicta un Auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de quebrantamiento de la medida cautelar de alejamiento adoptada (art. 468 CP); dicha resolución fue recurrida en reforma y posteriormente en queja. La Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso de queja porque entendía que al quebrantar en varias ocasiones la orden de alejamiento el recurrente, además de la comisión por su parte de los delitos por los que se había acordado esa medida, incurría presuntamente en un delito de quebrantamiento de medida cautelar. A juicio del Tribunal esto hacía pensar que, de ser puesto en libertad, su ex mujer y su hijo correrían el grave peligro de que continuase cometiendo acciones delictivas contra ambos.

El recurrente amparaba su pretensión principalmente en la violación de su derecho fundamental a la “libertad y a la seguridad” (art. 17.1 CE); así como en la violación de su derecho “a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión” (art. 24.1 CE).

La decisión del Tribunal Constitucional: la prisión provisional es siempre una medida excepcional

El TC, al examinar la resolución que acordó y confirmó la prisión provisional del

recurrente, utiliza básicamente los siguientes argumentos:

a) En primer lugar, está la cuestión de si el incumplimiento de una orden de alejamiento puede generar la adopción de la prisión provisional. El TC entiende que no cabe “dudar de la proporcionalidad en abstracto de la medida cautelar adoptada” (FJ 5). Lo que no le impide afirmar, por otro lado, que la existencia de peligro para la víctima “no cabe presuponer que existe de manera automática cada vez que se produzca el quebrantamiento de una orden de alejamiento” (FJ 5). Dicho de otra manera, ante el incumplimiento (reiterado o no) de una orden de alejamiento, el órgano judicial no puede acordar de manera automática el ingreso en prisión provisional del incumplidor; sino que debe analizar que concurren los presupuestos legal y constitucionalmente exigidos para la adopción de esta medida. El problema es si la decisión reunía los fines constitucionalmente legítimos que, según la doctrina constitucional, justifican la imposición de dicha medida cautelar (FJ 2).

El TC ha repetido hasta la saciedad que la prisión provisional siempre es, y debe seguir siendo, una solución de naturaleza excepcional, por muy deplorable que nos pueda parecer éste o cualquier otro suceso de violencia. La privación de libertad sólo puede estar justificada en la medida en que resulte totalmente imprescindible para la defensa de los bienes jurídicos; y en la medida en que no existan otros mecanismos menos radicales para conseguir el mismo fin (art. 504.III LECrim). Las exigencias constitucionales para su adopción no pueden ceder ni en estos casos, ni en ningún otro ilícito penal por muy atroz que sea.

b) En segundo lugar, se trata de comprobar si efectivamente la motivación de las resoluciones impugnadas incluye los

Los jueces no pueden sentirse presionados por la sociedad para adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales sin las garantías exigidas

El derecho a la presunción de inocencia obliga a no castigar al imputado a través de la prisión provisional.

elementos necesarios para establecer que, en este supuesto, existían indicios reales de los riesgos señalados (FJ 5). Ni el auto del Juzgado de Instrucción, ni el de la Audiencia exponen el fin constitucionalmente legítimo que justifica la imposición de una medida cautelar tan excepcional. Ninguno de ellos, dice la sentencia, “aporta elementos de convicción acerca de la existencia real del riesgo a evitar y que hubiera constituido un fin constitucionalmente legítimo justificativo de la imposición de tan excepcional medida cautelar”. Y continúa señalando que “dichas resoluciones tienen un déficit de motivación al no expresar las razones que explicaran los motivos por los que los órganos judiciales alcanzaron una convicción positiva acerca de la posibilidad de que, de permanecer en libertad, el actor acabara atentando contra la vida o contra la integridad física y moral de su mujer” (FJ 7).

La prisión provisional se encuentra en la actualidad regulada en los arts. 502 y ss de la LECrim (en la redacción dada por las LO 13/2003 y 15/2003). Sin embargo, en el momento en el que se adoptaron las resoluciones objeto del recurso de amparo los arts. 503 y 504 LECrim estaban pendientes de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el propio TC en la STC 47/2000. Esta circunstancia tenía que haber estado muy presente en la actuación tanto del juez de lo penal como de la AP. La deficiente regulación legislativa existente hasta la aprobación de la LO 13/2003 se fue subsanando a lo largo de los años con una intensa actividad del Alto Tribunal, que ha venido señalando como fines constitucionalmente legítimos de esta medida evitar “la sustracción a la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la justicia penal o la reiteración delictiva” (STC 128/1995). En este sentido, las sentencias del TC ponen también de manifiesto que en la mayoría de los casos existía una incorrecta o insuficiente motivación por parte de los jueces de instancia de las resoluciones en las que se acordaba la prisión provisional.

Cuando se acuerda la prisión provisional, es preciso identificar la finalidad que se persigue con esa medida. Las resoluciones recurridas se limitaron a acreditar un riesgo “futuro, presunto e incierto”. Y esto no vale. Como tampoco vale argumentar que en aquel momento el riesgo era real y cierto

porque así lo ha corroborado una sentencia con el tiempo. Aunque resulte paradójico, el hecho de que D. Enrique fuese finalmente condenado por dos delitos de amenazas, sendas faltas de lesiones e injurias, y un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, no tiene nada que ver con lo que ahora se está discutiendo: si en el momento en que se adoptó la prisión provisional existía un riesgo concreto, real y cierto. La prisión provisional no tiene como finalidad la anticipación de una pena. El derecho a la presunción de inocencia obliga a no castigar al imputado a través de la prisión provisional; ni ésta ni ninguna otra medida cautelar, puede tener un carácter retributivo de una infracción que aún no se ha establecido jurídicamente. Es más, el presente caso vuelve a reiterar que la prisión provisional no es el instrumento más idóneo -ni quizá el más constitucional- para luchar contra ilícitos penales especialmente sensibles para la sociedad y que generan una especial alarma social.

Por último, es necesario llamar la atención sobre uno de los argumentos esgrimidos por el MF, el recurrente, y la propia víctima en sus alegaciones: la posible vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE). Todas las resoluciones adoptadas ignoraron la prueba solicitada por el recurrente consistente en que se tomara declaración a su hijo, menor de edad, presente en el encuentro habido entre sus padres que está en el origen de la imposición de la medida de prisión provisional, sobre si su madre había acudido voluntariamente al parque en el que dormía el recurrente, lo que sería revelante al efecto de demostrar que no era él quien había quebrantado la orden de alejamiento. El hecho de que no se haya practicado esta prueba implica también la violación del art. 24.2 CE. Sin embargo, el fallo de la sentencia sólo otorga el amparo por la vulneración del derecho a la libertad personal del art. 17.1 CE y del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. He aquí la razón del voto particular concurrente, para el que la sentencia “no expresa con la claridad que la delicadeza del caso reclama, las concretas razones que con carácter exclusivo imponen la estimación de la demanda”. La falta de motivación por la que se otorga el amparo (art. 24.1 CE) es aún más evidente si se tiene en cuenta que ni el

Juzgado de Instrucción, ni la Audiencia resolvieron expresamente sobre la prueba que solicitó el recurrente en múltiples ocasiones.

En definitiva, el Tribunal Constitucional declara que las resoluciones recurridas tenían un déficit en su motivación, ya que los órganos judiciales no explicaron cómo llegaron a la convicción positiva de que existía ese riesgo que justificaba el adoptar esa medida que representa la más grave intromisión que puede realizarse en el derecho a la libertad de una persona. Del quebrantamiento de una orden de alejamiento no cabe deducir automáticamente que existe un peligro cierto para los bienes jurídicos que se intentan proteger. Puede haberlo, pero antes hay que identificarlo y razonar cómo se llega al convencimiento certero de ese riesgo. Esto es precisamente lo que no hicieron los órganos judiciales en las resoluciones recurridas. Cuáles fueron las razones por las que estos órganos no actuaron con la diligencia que les es exigible, sólo ellos lo saben. En todo caso, y por el bien de todos, los jueces no pueden sentirse presionados por la sociedad para adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales sin las garantías exigidas.

Recapitulación

La sentencia en cuestión resuelve un caso de amparo aplicando una consolidada doctrina constitucional. El TC ha reiterado en numerosas ocasiones que la gravedad del delito no es el único elemento a tener en cuenta para acordar el ingreso en prisión provisional del imputado. La única singularidad de este caso es la connotación que los distintos operadores jurídicos y sociales quieran hacer de su lectura. Por eso es tan importante el estilo y la medida que los medios y asociaciones, ya sea de forma coetánea o sucesiva, con igual o diferente sensibilidad, utilicen para transmitir a la opinión pública el contenido de esta resolución.

Por mucho que a algunos les pese, esta doctrina es aplicable a todos los delitos, incluidos por supuesto los que están siendo objeto de este comentario. La función de todos los jueces, y en último lugar, de los magistrados del TC, es garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Derechos de los que también son titulares, aunque a alguno no le parezca adecuado, los maltratadores, los violadores, los terroristas, los asesinos, etc.